



Reunión de Pedro Sánchez y sus ministros con Antonio Garamendi, Gerardo Cuerva, Unai Sordo y Pepe Álvarez, ayer en la Moncloa. G. ÁLVAREZ

El Gobierno crea una mesa de diálogo social para articular la respuesta de España

Sánchez pacta con los líderes sindicales y patronales la posible protección a los sectores más afectados

RAQUEL PASCUAL
Madrid

El Gobierno y los agentes sociales crearán una mesa de diálogo social para articular la respuesta de España ante la guerra arancelaria anunciada por Estados Unidos, así como la manera de canalizar los posibles recursos para proteger a los sectores productivos que resulten más afectados y a sus trabajadores.

Este es el acuerdo alcanzado ayer por el presidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez, con los máximos líderes empresariales de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, así como con los secretarios generales de los sindicatos CC OO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez. Todos se reunieron ayer por la tarde, horas antes del anuncio de aranceles de Trump, en el Palacio de la Moncloa para abordar la situación económica de España y la UE ante la batalla comercial.

Tras la reunión, Sánchez aseguró en su cuenta de la red social X que España "protegerá a sus empresas y trabajadores y seguirá apostando por un mundo abierto". Y añadió: "Hoy [por ayer] me he reunido con las principales patronales y sindicatos de nuestro país para hablar sobre los aranceles propuestos por la Administración estadounidense y la posi-

ble respuesta nacional y europea". Fuentes gubernamentales confirmaron que en este encuentro Sánchez y varios miembros de su Ejecutivo, —entre los que estaban los ministros de Economía, Carlos Cuerpo; de Trabajo, Yolanda Díaz; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Agricultura, Luis Planas; y de Industria, Jordi Hereu— trataron con los líderes patronales y sindicales "las medidas arancelarias que podría tomar la Administración estadounidense y las posibles respuestas, tanto a nivel europeo como nacional".

Asimismo, "se ha abordado la situación geopolítica y se ha compartido la necesidad de una Unión Europea fuerte y unida, que proteja a la industria, los trabajadores y las empresas", añadieron las mismas fuentes. "Hemos convenido en crear una nueva mesa

En el encuentro en Moncloa, se abordó también la situación geopolítica

Los participantes insisten en la necesidad de coordinarse con la UE

de diálogo social para canalizar las respuestas", explicó el líder de CC OO, quien también instó al Gobierno, a que "de forma consensuada en el marco de la Unión Europea, identifique sectores exportadores de Estados Unidos a los que va a haber que someter también a una política arancelaria

por parte de Europa". Para Sordo, "no es deseable esta guerra comercial, pero no va a quedar más remedio que hacerlo". Además, destacó que, junto a la articulación de un consenso sobre la respuesta que se dé en el marco de la UE, "es muy importante que, de forma paralela, se aprueben fondos de contingencia que sirvan para apoyar a los sectores que se puedan ver impactados por la guerra comercial que desata EE UU".

Igualmente, en los sectores en los que pudiera haber alguna afectación en el empleo, el secretario general de CC OO reclamó que, en esa mesa de diálogo social con los empresarios y el Gobierno se busquen fórmulas "que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo".

En cualquier caso, durante este encuentro se abordó también que Europa "debe reforzar su autonomía estratégica para limitar la dependencia externa de países como Estados Unidos o Rusia mediante un despliegue de la autonomía energética, de la política industrial y rehaciendo lazos comerciales con otras partes del mundo como puedan ser América Latina o China", concluyó Sordo.

En la patronal CEOE, antes de la reunión con Sánchez, su presidente consideró que la respuesta que se dé a esta guerra arancelaria no puede hacerse de manera independiente. Garamendi destacó que tiene que producirse forzadamente una reacción conjunta y consensuada de toda la Unión Europea. De hecho, los empresarios españoles pretenden también acordar cómo abordar la situación que surja tras el anuncio oficial de EE UU con la patronal europea Business Europe.

En este sentido, el Gobierno indicó, tras la reunión, que "trabaja en estrecha colaboración con la UE en dicha respuesta con el fin de proteger especialmente a los sectores que puedan verse afectados". El Consejo de Ministros aprobó ya el martes la prórroga del Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III), hasta el próximo 31 de diciembre.

Trabajo insiste en que reformará la indemnización por despido

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO
Madrid

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha dado la razón a CC OO en su reclamación contra el sistema español de indemnización por despido improcedente. El organismo, que depende del Consejo de Europa, dice que España viola la sección b) del artículo 24 de la Carta Social Europea, que dicta el "derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada". Esto ya lo sabe el Gobierno y también el sindicato que lidera Unai

Sordo, pero no pueden hablar de ello porque pesa un embargo sobre la resolución. Podrán comentar el dictamen en torno a junio, cuando se hará público de manera oficial. Una vez superada esa meta volante, dijo ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, convocarán a los agentes sociales para abordar una reforma que reclaman los sindicatos y que rechazan las patronales.

"Hay que esperar a conocer públicamente esta resolución", indicó Pérez Rey en la rueda de prensa en la que analizó los datos de paro registrado y afiliación. Pidió paciencia porque considera

clave tomar en cuenta qué dice la resolución sobre la readmisión o los salarios de tramitación, asunto que el Gobierno debe "tener en cuenta en una eventual reforma", según el secretario de Estado.

Esta información se agregará a la ya conocida por la reclamación anterior de UGT, en la que también se llega la conclusión de que España no cumple con el estándar de Estrasburgo en materia de despido por su sistema tasado en días, que deriva en compensaciones altas para los empleados con mucha antigüedad e infimas para los de relaciones laborales cortas. "No hay ninguna duda de que

Europa considera que el sistema de despido de España está herido. No diría de muerte, pero no cumple la Carta Social Europea. Este Gobierno tiene un compromiso firmado", dijo, en referencia a la ratificación de ese texto en 2021. "La interpretación de la Carta del CEDS es vinculante para los Estados que la han suscrito", agregó Pérez Rey.

Es una opinión diferente a la de Economía, que rechaza un cambio en el sistema de indemnización por despido y cree que España ya cumple la Carta. "Cumpliremos escrupulosamente los tratados internacionales que hemos suscrito. Está negro sobre blanco en el acuerdo de coalición, es un compromiso de PSOE y Sumar", insistió el número dos del ministerio de Yolanda Díaz. Asimismo, indicó que cuando se conozca el detalle de la resolución de CC OO

harán un "estudio técnico" que permita conocer "de manera exhaustiva" las exigencias que se derivan tanto de este dictamen como del que contestó a UGT. "Abriremos la mesa de diálogo social", comentó. "No oculto que ya lo estamos estudiando de forma detenida [las resoluciones]. Habrá una hoja de ruta", finalizó Pérez Rey.

El secretario de Estado de Trabajo también se refirió a otros proyectos de su ministerio, como la recién iniciada negociación para transponer la directiva europea de salarios mínimos. No entró en detalles, se limitó a indicar que la primera reunión solo fue una toma de contacto. Según pudo saber este periódico, el ministerio manifestó en ella su intención de automatizar de ahora en adelante las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), una idea que rechazan las patronales.